

Correctivos disciplinarios en las corporaciones de seguridad pública en México

Disciplinary procedures in public security corporations in Mexico

Juan Gabriel Lomelí-Delgadillo^{1*}

Fecha de recepción: 28 de mayo de 2019

Fecha de aceptación: 28 de enero de 2020

Resumen - Los correctivos disciplinarios mencionados en los reglamentos internos de las corporaciones de seguridad pública en México se han utilizado como métodos de terrorismo laboral por mandos con poca preparación y nulo liderazgo para lograr resultados que se podrían conseguir por otros medios, pero su falta de empatía y su obsesión por alcanzar metas a corto plazo, su desconocimiento en prevención del delito e inadecuada formación de nuevos reclutas redundan en el adiestramiento del personal sumiso que dichos mandos requieren para continuar con una represiva forma de trabajar; es decir, van creando nuevos trabajadores apegados a su forma de dirigir, robots que sólo obedecen y que no los pueden evidenciar en su incompetencia.

Todo lo anterior lo ha permitido el desinterés legislativo y gubernamental para subsanar los errores en materia de derechos laborales de los integrantes de las corporaciones de seguridad pública. La premisa siempre ha sido nombrar al "Gurú de la seguridad en turno" y andar ciegamente el camino que él fije. Los gobernantes nunca se han ocupado por conocer sobre estrategias de seguridad pública, únicamente confían plenamente en la persona que nombran y defienden su elección mientras no sea algo inevitable.

▼
Palabras clave: Policía, justicia, disciplina, castigos.

Abstract - Disciplinary procedures comprised within the internal regulations of public security corporations in Mexico have long been used as ways of workplace terrorism by overseers who lack both the required preparation for their posts as well as the leadership to achieve goals that could be attained by other means, but their lack of empathy, obsession for short-term goals and inexperience on the subject of crime prevention, combined with the inadequate training of new recruits, derive in the breeding of the submissive personnel that said overseers require to maintain their repressive working environment; that is to say, they groom their new employees to match their way of managing, creating robots that only obey and are unable to expose their bosses' incompetence.

This situation has paved the way for a disregard, in both the executive and the legislative branches, to rectify the mistakes made when it comes to the labor rights of those within public security corporations. The premise has always been to appoint the next "Security Guru", and to follow blindly whichever road he chooses. Politicians in office have never been concerned with learning the least about public security strategies: they simply put their trust in whoever they appoint and defend their stance, as long as it doesn't backfire.

▼
Keywords: Police, justice, discipline, punishment.

¹ Red Nacional de Asociaciones Policiales, A. C. Puebla de los Ángeles, Puebla, México, C. P. 68026. Profesionales en Proximidad Social Jalisco, A. C., Jalisco, México, C. P. 76890. *Correo electrónico: lobo8_2011@hotmail.com

Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres
Pitágoras

Introducción

Las corporaciones de seguridad pública de nuestro país, en todos los niveles de gobierno, utilizan algunas prácticas poco conocidas por la sociedad como medio para corregir las conductas de sus oficiales, con el objeto de mejorar su disciplina y así cumplir con las exigencias que día a día obligan a las instituciones policiales a tener el mejor adiestramiento y funcionamiento.

La sanción a la que nos referimos es impuesta por violar las normatividades internas que rigen a las corporaciones, así como otras conductas que de acuerdo con el libre albedrío de quien funge como su superior jerárquico son acciones que podrán remediarse a través de estos correctivos disciplinarios. De acuerdo con el Manual General de Deberes Policiales del Municipio de Zapopan (Municipio de Zapopan, 2003), se entiende por correctivos disciplinarios los castigos que se imponen a los policías por infracciones que no constituyan un delito; en tanto que en la Ciudad de México, la referencia más cercana se encuentra en el Régimen Disciplinario para el Policía del Distrito Federal (Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, 2019, p. 1), que los define como “[...] las sanciones a que se hace acreedor el elemento policial que incurra en conductas que contravengan las disposiciones normativas aplicables en la materia [...]”.

La libertad de que cada autoridad pueda calificar y establecer los correctivos disciplinarios genera que haya brechas que fomentan la imparcialidad, ya que las sanciones pueden ser heterogéneas, algunas de las más comunes son la amonestación² verbal o escrita,

el arresto,³ la suspensión temporal de actividades⁴ o el cambio de área. Es decir, pueden aplicarse en razón del incumplimiento de una orden considerada indispensable para la operatividad y el ejercicio de la función de la seguridad pública, hasta algunas otras que se imponen con la intención de satisfacer necesidades ajustadas al favorecimiento personal de quienes las decretan. De igual forma, se imponen por violaciones a las normatividades internas que no sean consideradas delito, que de acuerdo con el artículo 123 apartado B, fracción XIII de nuestra Carta Magna, a estas corporaciones se les permite regirse por sus propias leyes.

El policía y sus derechos

Con base en lo antes expuesto, la apertura bajo la cual se conduce el sistema interno de las policías del país permite que, dada la autonomía, los presidentes o gobernadores puedan elegir a quienes en su parecer es el candidato ideal para liderar las corporaciones policiales. Se trata de un proceder común y poco recomendable, considerando las abismales diferencias en origen, objetivos, finalidad, ideología, marco jurídico que las regula, perfiles académicos y operativos de quienes las componen y el claro desapego a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (*Diario Oficial* de la Federación, 2016, p. 18), la cual especifica en su artículo 21, párrafo 10, que “Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional [...]”.

De este modo se da pie a la violación de los derechos humanos que puedan cometer, pues los funcionarios públicos en ocasiones no tienen el más mínimo grado

² La amonestación es el acto en el que es apercibido un elemento por un superior ante alguna falta; se le invita a no volver a incurrir en ello. Puede ser verbal o escrita.

³ El arresto es la reclusión que se hace a un elemento y se mide por horas, aplicado posterior a la jornada laboral; puede ser dentro de las instalaciones de la dependencia o en servicios que la corporación requiera de su participación. Se comunica de manera escrita y verbal.

⁴ Suspensión temporal de actividades, hace referencia a la inhabilitación para laborar sin goce de sueldo.

de conocimiento en materia de seguridad pública, poniendo en manos de inexpertos el orden público y la seguridad de las mexicanas y los mexicanos. En el mismo contexto, podemos resaltar que los policías de México no son considerados servidores públicos, por lo tanto, se encuentran en el limbo al no contar con una figura jurídica que los respalde; por consiguiente, se les priva de algunos derechos laborales, tales como sindicatos, que ayuden a vigilar el cumplimiento de sus derechos como trabajadores del Estado. Por consiguiente, al carecer las autoridades de las corporaciones policiacas de profesionalismo y tener la apertura de hacer en cada corporación lo que consideren necesario para su operación, se implementan correctivos hacia los oficiales con el argumento de imponer "disciplina" entre ellos.

El tipo de disciplina que se menciona en los reglamentos internos de los cuerpos de seguridad pareciera que sólo puede existir en un contexto de militarización, ya que la forma de enseñar a los cadetes en algunas academias de policía generalmente está basada en quebrantar su autoestima para que se acostumbren a obedecer. Al respecto, se puede mencionar la práctica común de "tablear" (golpear) a los reclutas con un trozo de madera por faltas mínimas cometidas al reglamento o por fallas al llevar a cabo un ejercicio de marcha o alguna práctica de adiestramiento (s.a., 2006). La humillación es frecuente en el aleccionamiento que se da en las academias de formación. Pero ¿funciona esta manera de corregir?, ¿es legal?, ¿es adecuada?, ¿produce resultados positivos?, ¿es viable en una sociedad exigente de los derechos humanos?

La noción de obediencia adquiere importancia en las y los policías debido a que pertenecen a instituciones públicas jerarquizadas y disciplinadas, que responden a una cadena de mando. El deber de obediencia es consustancial al principio de jerarquía, que constituye una de las bases de la organización administrativa del Estado (Cruz, 2010). Por otro lado, un correctivo disciplinario debe enmendar algo, de lo contrario se

convierte en una demostración de poder que podría usarse como herramienta de hostigamiento laboral en mandos poco eficaces, condicionados a la permanencia en sus puestos por la inmediata consecución de objetivos que limitan, a la larga, la prevención del delito, que a fin de cuentas es el propósito primordial que deberían garantizar todos aquellos y aquellas profesionales de la seguridad pública que se precien de serlo.

El filósofo Luis Recaséns (1965, p. 147) afirma que el ser humano:

[...] no debe quedar a merced del arbitrio subjetivo o capricho de otra persona. Toda exigencia jurídica debe tratar al obligado como un prójimo, es decir, como una persona con dignidad, como un sujeto que tiene fines propios; que es un fin en sí mismo y nunca como un mero medio para fines ajenos.

De acuerdo con Haro-Reyes (2013), el mando superior debe tomar en cuenta que está dirigiendo a personas, compañeros y compañeras de profesión, mujeres y hombres en cumplimiento de su deber, pero principalmente, a seres humanos que merecen su respeto por encima de cualquier cosa. En un contexto donde se vulneran los derechos humanos y existe desconfianza en la autoridad no puede haber seguridad pública; los derechos humanos surgen y se fundamentan en la noción de la dignidad humana, la cual implica que una persona, por el sólo hecho de pertenecer a la especie humana, posee un valor intrínseco.

Hoy en día las nuevas generaciones de policías tienen un nivel intelectual y académico más desarrollado y una visión del mundo más abierta; están más informadas y se integran en sociedad, ya no son parte del grupo cerrado, en el cual únicamente participaban ellos y ellas, y un poco sus familias. Esto ha despertado inconformidades generalizadas, que cuando se trata de aplicar el orden con las medidas

arcaicas –el abuso del recurso disciplinario– ocasiona un rechazo hacia las formas de represión y provoca más rebeldía; por consiguiente, la lealtad institucional se pierde por la confrontación que algunos mandos ocasionan entre ellos y sus subordinados.

Asimismo, podemos señalar que no nada más son esas instituciones las que se unen a la lucha por encontrar nuevos métodos que implanten la verdadera disciplina buscada por las dependencias encargadas de la seguridad, sino que han recibido apoyo externo, tal es el caso de las comisiones de derechos humanos que han formulado recomendaciones en pro de las condiciones laborales de los y las policías, o bien las mesas de trabajo o foros que grupos de policías cansados de la falta de estabilidad laboral y derechos humanos han organizado, con el objeto de ir más allá y diseñar políticas públicas que propicien un adecuado funcionamiento y ejercicio de las corporaciones policiacas de nuestro país.

El Poder Legislativo no se ha quedado atrás y ha presentado propuestas que apuestan por un cumplimiento de los derechos humanos y laborales de los encargados de la seguridad, generando iniciativas que pretenden reformar principalmente el artículo 123, apartado B.

La legalidad de los correctivos disciplinarios

La legislación vigente contempla los correctivos disciplinarios como sanciones aplicables al elemento policial que incurra en conductas que contravengan las disposiciones normativas; sin embargo, una acción que entraña la privación de la libertad como medio para hacer entender a un policía que su proceder es erróneo supera con mucho el código draconiano usado en la antigüedad.

En el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2016) se menciona claramente la disciplina como eje rector de la actuación policial, así como en el artículo 6 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Congreso de la Unión, 2019). En el artículo 44 de

esta última ley se enuncian tres tipos de correctivos: amonestación, suspensión y remoción, descritos ambiguamente, dejando a voluntad de los encargados de las corporaciones la creación u adopción de otros correctivos que incluso llegan a ser flagrantes abusos a la libertad personal de los elementos policiacos que las conforman. Por ejemplo, para los policías de Ciudad de México (antes Distrito Federal) se establecen tres tipos de sanciones: I. Amonestación, II. Arresto de 12, 24 horas o 36 horas, y III. Cambio de adscripción. Mientras que en la policía municipal de Zapopan, Jalisco, se imponen las siguientes: I. Amonestación, II. Arresto, III. Suspensión temporal y IV. Cambio de adscripción, de dirección, sector o escuadrón. Los correctivos para los elementos de Puebla son: I. Amonestaciones, II. Arresto hasta de 36 horas y III. Cambio de adscripción.

En este tenor, si revisamos la normatividad y analizamos una falta prevista en las tres corporaciones, se observa que tienen en común ciertas agraviantes: mientras que en Ciudad de México la sanción por faltar de manera injustificada a realizar sus labores es un arresto por 12 horas, en Zapopan puede ser hasta por 36 horas; en tanto que en Puebla se impone un castigo de 24 horas. Este es un ejemplo claro de que la libertad permite a las instituciones que cada una discipline según crea necesario.

Aunque estas sanciones están previstas en las normatividades y deba existir la disciplina, no hay argumento que justifique la violación de los derechos laborales de ningún trabajador, ni siquiera la supremacía del multicitado interés general sobre el particular, porque estaríamos aceptando la existencia de ciudadanos de “primera” con todos los derechos y ciudadanos de “segunda” cuyos derechos están supeditados a “las necesidades del servicio”, por usar un término del argot policial.

Y así es como comienza el trayecto de los policías en busca de hacer cumplir sus derechos, en donde se ven en la necesidad de contratar a un abogado para que tramite un amparo y que un juez federal le otorgue la suspensión del acto, adicional al costo por

honorarios del profesionista, el tiempo invertido por un familiar al solicitar un amparo por comparecencia en la defensoría de oficio en el Poder Judicial de la Federación, además del plazo que tarde en darle trámite el actuario al trasladarse hasta el lugar donde esté cumpliendo su arresto o privación de permiso de salida. Por ello es que muchos policías prefieren cumplir con su correctivo a invertir dinero y tiempo que les perjudica no sólo a ellos, sino también a sus familiares, y empieza la disyuntiva entre lo que tienen que hacer y lo que pueden hacer, convirtiéndose en un ciclo que termina volviéndose en tradición. Sin mencionar las posibles consecuencias que puedan afrontar después, al ser señalados por sus mandos como oficiales problemáticos a quienes no les gusta seguir órdenes y, por ende, los catalogan como indisciplinados.

¿Corrección o reentrenamiento?

Un recurso alternativo es el reentrenamiento, que aun cuando está contemplado en algunos reglamentos internos de cuerpos de seguridad, no se aplica por las dificultades y gastos operativos que conlleva, por la cantidad de horas del instructor, el área para la instrucción y el personal que cubriría las horas del elemento que se está reentrenando.

Después de todo, si un policía se equivoca, la tarea de su mayor jerárquico es indicarle en qué consistió su error, ayudarlo a corregirlo y orientarlo para que no lo vuelva a cometer, en razón de que una falta en el actuar de un policía se puede traducir en menoscabo a la vida, patrimonio o derechos del ciudadano al que sirve. Ninguna garantía podrá tener un ciudadano que por una equivocación del policía se vea afectado, si el mando que está a cargo de él se justificará con la frase: "No se preocupe, ya lo arresté".

Podemos mencionar que hay dos situaciones que ameritan correctivos y que según la causa podrá evaluarse oportunamente la sanción que corresponderá: las que tienen que ver con la disciplina, es decir, la voluntad del policía, y aquellas que provienen de un error cometido debido a falta

de capacitación. Las primeras son causadas por la conducta y la libre decisión del policía y se debería considerar un castigo acorde con el incumplimiento de alguna obligación, esto, sin violarse sus derechos por los actos indisciplinados. Sin embargo, las situaciones en las cuales se comete un error por no contar con la capacitación debida, o un deficiente nivel de asimilación del conocimiento impartido por el instructor, necesariamente obliga a un reentrenamiento para que -como se ha dicho a lo largo de este artículo- el correctivo funja y corrija, y no entorpezca la labor del policía.

Por otra parte, los correctivos disciplinarios, como se aplican actualmente, deterioran la salud del elemento y perjudican su núcleo familiar, ya que consisten siempre en la privación de la libertad personal; en algunas corporaciones, incluso, trabajan durante su arresto. Sumado a estas horas, el turno agotador de 12 o 24 horas no le deja tiempo para descansar o participar de las dinámicas familiares. Según un estudio de la Asociación Causa en Común:

En México no existe ninguna ley que regule los horarios de trabajo de los cuerpos de seguridad municipal, estatal y federal. Esta falta de regulación asume que la heterogeneidad del país y las disparidades en necesidades y recursos justifican, en un sentido amplio, una libertad auto regulatoria, y en su interpretación más perniciosa, un margen para el abuso (Causa en Común, 2018, p. 12).

Discusión

Difícil es pensar que un policía violentado en sus derechos laborales, estresado por una jornada que demanda el cien por ciento de su atención y pericia operativa, por los deberes propios de una familia y tal vez por su desarrollo personal pueda ser un profesional pleno de la seguridad. En un sistema de aplicación de la ley que privilegia las garantías individuales, los policías no deberían ser considerados como

ciudadanos de “segunda”, no se pueden menoscabar los derechos de unos por los de otros. Esta explicación siempre ha sido usada para amedrentar a la sociedad y no que sea partidaria de la función del policía, con frases como “Sólo haciendo que los policías trabajen horas de más se puede garantizar la seguridad”, “No hay suficientes elementos, los que están deben velar por los derechos y seguridad de los ciudadanos”, “El fin justifica los medios”. Pues no, en situaciones que tienen que ver con derechos humanos siempre es importante buscar un equilibrio.

El abuso en contra de los oficiales de policía –ya sea a través de horarios excesivos o correctivos disciplinarios– se podría evitar si existiera empatía y hermandad por parte de los superiores, sin dejar fuera la pericia que deberán tener quienes se encuentran al frente, para de esta manera erradicar la antigua práctica del libre albedrío en la toma de decisiones de las corporaciones policiacas. El profesionalismo es siempre una cualidad indispensable en quienes se encargan de la seguridad pública y ésta debería garantizar un trato justo hacia ellos; no obstante, algunos mandos superiores carecen de esa aptitud que debían tener, dejando ese cargo a la administración de recursos humanos y a los presidentes o gobernadores, según corresponda el caso.

En este tenor, podríamos decir que una adecuada capacitación de recursos humanos permitiría que desarrollaran su potencial y, por ende, una mayor eficiencia, lo cual ayudaría a prestar un mejor servicio a la sociedad. Ya que, desde la academia, desde la formación de nuestros policías se reproducen prácticas que lejos de fomentar disciplina, provocan el menosprecio de la labor policial. En conclusión: no se puede argumentar que sólo explotando a las personas y violentando sus derechos es posible salvaguardar la seguridad del resto de ellas. Lo anterior termina siendo una ironía, pues quienes tienen como objetivo principal cuidar de ciudadanas y ciudadanos, del orden público y hacer valer las leyes,

no cuentan con garantías y derechos humanos que aseguren su integridad y la de sus familias.

Por tanto, la sociedad, así como los gobiernos, deben hacer lo posible para evitar que la ley se corrompa y se violen los derechos humanos de quienes nos protegen, lo que implicaría reformar las leyes y reglamentos vigentes, a fin de que adquieran una personalidad como servidores públicos y brindarles estabilidad laboral. Por consiguiente, se abriría la puerta a crear un organismo defensor que busque la unión en los policías de todo el país, la profesionalización de su labor y la lucha homogénea de sus derechos.

Referencias

Causa en Común. (2018). *Jornadas laborales de la policía en México*. México: autor. Recuperado de http://causaencomun.org.mx/beta/wp-content/uploads/2019/04/JORNADAS-LABORALES-_documento-largo-1.pdf

Congreso de la Unión. (27 de mayo de 2019). *Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública*. Ciudad de México. Recuperado de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNSP_270519.pdf

Cruz S., L. A. (2010). El concepto de autoridad en el pensamiento de Aristóteles y su relación con el concepto de autoridad en el comportamiento administrativo. *Contaduría y Administración*, 231, 53-78. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/395/39512458004.pdf>

Diario Oficial de la Federación. (2016). *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*. Ciudad de México: autor. Recuperado de <http://wwwordenjuridico.gob.mx/Constitucion/cn16.pdf>

Gobierno Constitucional del estado de Jalisco. (2000). *Reglamento de la Policía Estatal de Jalisco*. Guadalajara: autor. Recuperado de https://info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/leyes/Reglamento_Policia_Estatal_0.pdf

Haro-Reyes, D. J. (2013). Reflexión sobre los derechos de los policías en México. *Criminalidad*, 55(1), 153-164. Recuperado de <http://www.scielo.org.co/pdf/crim/v55n1/v55n1a10.pdf>

Municipio de Zapopan. (2003). Manual General de Deberes Policiales de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan Jalisco. *Gaceta Municipal*, X(50). Recuperado de https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2015/03/Manual_Deberes_Policiales.pdf

Recaséns S., L. (1965). *Tratado general de filosofía del Derecho*. México: Editorial Porrúa.

s.a. (2006). Intactos, los abusos en el Ejército mexicano. *Proceso*, 1560. Recuperado de <https://www.proceso.com.mx/221440/intactos-los-abusos-en-el-ejercito-mexicano>

Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. (2019). *Régimen Disciplinario para el Policía del Distrito Federal*. Ciudad de México: autor. Recuperado de http://www.ssp.df.gob.mx/documentos/dgip/regimen_disciplinario.pdf



"Chapulín calavera"

Obra escultórica de Patricio Santiago Paz

Villa de Etla, Oaxaca, marzo de 2018

Fotografía de Alejandro Echeverría